



DESAJME21-4432

Medellín 25 de octubre de 2021

Honorable Magistrado

CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA LABORAL

rlopezb@cendoj.ramajudicial.gov.co

reltribsupmed@cendoj.ramajudicial.gov.co

Medellín

Asunto: *Pronunciamento Acción de tutela instaurada por HEVER LEÓN JARAMILLO OROZCO.*

Ref.:

RADICADO: 05001-22-05-000-2021-00302-00

ACCIÓN: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIONANTE: **HEVER LEÓN JARAMILLO OROZCO**

ACCIONADO: SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ANTIOQUIA Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ANTIOQUIA JUDICIAL, SECCIONAL MEDELLÍN – ANTIOQUIA – CHOCÓ.

VINCULADOS: JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN.

JUAN CARLOS PELÁEZ SERNA, domiciliado en la ciudad de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía número 70.381.391 de Cocorná (Antioquia), en virtud de las facultades establecidas en la Ley 270 de 1996 "Estatutaria de Administración de Justicia", artículo 103; y en la Resolución No. 4104 del 13 de mayo de 2019 "*Por medio de la cual adelantan unos nombramientos en empleos de libre nombramiento y remoción*"; obrando en nombre y representación de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA en calidad de DIRECTOR SECCIONAL de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MEDELLÍN – ANTIOQUIA, dentro del término concedido por su Despacho y a efectos de ejercer el derecho de defensa y contradicción, doy respuesta a su requerimiento dentro de la presente Acción Constitucional de Tutela, así:

1.

LO PRETENDIDO POR EL ACCIONANTE

Pretende el accionante a través de la acción de tutela de la referencia,

(Sic) Solicito al juez constitucional que se me brinde protección a los derechos fundamentales, especialmente el de la seguridad social integral, y la estabilidad laboral reforzada, hasta tanto se obtenga un diagnostico definitivo de mis patologías físicas y sensoriales, y se tramite el proceso de calificación de la pérdida definitiva de capacidad laboral.

2. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A HECHOS Y PRETENSIONES

A efectos de respaldar y probar las actuaciones de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, en calidad de empleador del accionante, procedo a analizar y bridar claridad con la siguiente información y documentación.

Sea lo primero advertir, que de conformidad con el artículo 99 y 103 de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de Administración de Justicia, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, es un órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las **actividades administrativas de la Rama Judicial**, con sujeción a las políticas y decisiones del Consejo Superior de la Judicatura; por tanto, NO tiene ninguna injerencia dentro de las pretensiones de la accionante, toda vez que:

Si bien el accionante argumenta que lleva más de 180 días de incapacidad continua, también él mismo afirma que sus patologías *continúan en estudio*, por lo que *no ha sido posible tener un diagnóstico concluyente*.

Resalto que es totalmente cierto lo que el actor manifiesta en el numeral 4.- de su escrito tutelar, a saber:

*Todas las incapacidades laborales las he tramitado por el conducto legal regular; **incluso cuando cumplí los 180 días de incapacidad la dependencia de Recursos Humanos-Tesorería de la Administración Judicial, emitió el acto administrativo correspondiente para que su pago se siguiera efectuando por el Fondo de Pensiones.*** (Negrillas y subrayas propias).

Igualmente es verdad que al empleado le fue notificada la Resolución DESAJMER21-11420 del 30 de septiembre de 2021 *“Por medio de la cual se ordena la suspensión de pagos de servidores judiciales derivados de incapacidades médicas superiores a 180 días”*, en la que se tuvieron las siguientes consideraciones:

*(Sic) El señor **JARAMILLO OROZCO HEVER LEON**, identificado(a) con cedula de ciudadanía número 98.505.941, se encuentra vinculado a la Rama Judicial del Poder Público desde el 24 de julio de 2014 y actualmente se encuentra en el cargo de Citador*

del Juzgado 11 Laboral del Circuito de Medellín.

El día 21 de septiembre de 2021, se recibe por correo electrónico, escrito de incapacidad con fecha del 21 de septiembre de 2021, la cual suma, un total de 250 días, ininterrumpidamente por Enfermedad General.

Consultadas las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social, en el sistema de Recursos Humano y Nómina Efinomina, se evidencia que el señor Jaramillo Orozco, pertenece a E.P.S. SURA.; Fondo de Pensiones PROTECCION y ARL POSITIVA.

Frente a los hechos narrados anteriormente, La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, tiene presente las siguientes consideraciones:

Para el pago de incapacidades, debe señalarse que durante los periodos de incapacidad temporal el trabajador no recibe salario, sino un auxilio por incapacidad, que se pagara como a continuación se especifica:

- 1. Que, tratándose de enfermedad de origen común, el auxilio por incapacidad, se reconocerá por el Sistema, a través de la EPS a la cual el trabajador se encuentre afiliado, hasta 180 días continuos de incapacidad.*
- 2. Que, tratándose de enfermedad de origen laboral, el auxilio por incapacidad, se reconocerá a través de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) a la cual el trabajador se encuentre afiliado, hasta 180 días continuos de incapacidad.*
- 3. En efecto, el auxilio por incapacidad, se define como el reconocimiento de la prestación de tipo económico y pago de la misma que hacen las EPS o las ARL a sus afiliados cotizantes no pensionados, por todo el tiempo en que estén inhabilitados física o mentalmente para desempeñar en forma temporal su profesión u oficio habitual. En ningún caso se le pagará a un afiliado al sistema simultáneamente incapacidad por enfermedad general, incapacidad por enfermedad profesional y pensión de invalidez.*
- 4. Que, tratándose de enfermedad calificada de origen común, cuya incapacidad es superior a ciento ochenta (180) días continuos, la obligación de pagar el Auxilio económico es de la Administradora del Fondo de Pensiones (AFP), al cual el trabajador se encuentre afiliado.*
- 5. Que, tratándose de enfermedad calificada de origen laboral, cuya incapacidad es superior a ciento ochenta (180) días continuos, la obligación de pagar el Auxilio económico es de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), al cual el trabajador se encuentre afiliado.*

En relación, al pago de Prestaciones Sociales, se tendrá en cuenta lo señalado en el parágrafo del artículo 18 del Decreto 3135 de 1968 “por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”

“Artículo 18º.- Auxilio por enfermedad. En caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, ocasionada por enfermedad, los empleados o trabajadores tendrán derecho a que la respectiva entidad de previsión social les pague, durante el tiempo de la enfermedad, las siguientes remuneraciones:

a) Cuando la enfermedad fuere profesional, el sueldo o salario completo durante ciento ochenta (180) días, y

b) Cuando la enfermedad no fuere profesional, las dos terceras partes del sueldo o salario durante los primeros noventa (90) días, y la mitad del mismo por los noventa (90) días siguientes.

Parágrafo- La licencia por enfermedad no interrumpe el tiempo de servicio.

Cuando la incapacidad exceda de ciento ochenta (180) días, el empleado o trabajador será retirado del servicio, y tendrá derecho a las prestaciones económicas y asistenciales que este Decreto determina” (cursiva, negrita y subraya fuera del texto)

En ese orden de idea, es claro que el legislador estableció el reconocimiento, pago de primas y prestaciones sociales hasta el día ciento ochenta (180) de incapacidad, y que a partir del día ciento ochenta y uno (181) de incapacidad continua y mientras se resuelve la situación de capacidad para laborar del trabajador -en el plazo máximo de trescientos sesenta (360) días calendario adicionales a los primeros ciento ochenta (180) días, cuando se trata de accidente o enfermedad común, bien sea con reconocimiento pensional o con indemnización por pérdida de la capacidad laboral-, el legislador previó a favor del incapacitado, tal y como se desprende de las disposiciones consagradas en los artículos 1º del Decreto 819 de 1989 y 23 del Decreto 2463 de 2001, como única retribución o derecho, el pago del subsidio económico por enfermedad, a cargo del respectivo Fondo de Pensiones o de la Administradora de Riesgos Laborales, sin que se genere para el pagador de la Rama Judicial ninguna obligación por concepto de prestaciones sociales o demás emolumentos remuneratorias, entre otros los previstos en los artículos 12 del Decreto 717 de 1978 y 42 del Decreto 1042 de 1978, y en los Decretos 1306 de 1978, 247 de 1997 y 3899 de 2008, como quiera que la cancelación de esos conceptos salariales tiene como requisito sine qua non la efectiva prestación del servicio por parte del empleado o funcionario Judicial, evento que no ocurre cuando está incapacitado de donde se deriva que no hay lugar a reconocimiento de salario ni prestación social alguna por parte del empleador Rama Judicial, pero si al subsidio económico por enfermedad el cual está a cargo del Fondo de Pensiones.

De otro lado, en **Sentencia T-920/09, Referencia: Expediente T-2.317.440**. Sala Cuarta de Revisión de la **Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Mauricio González Cuervo**, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, han hecho el siguiente pronunciamiento pronunciado lo siguiente:

“Así las cosas, de conformidad con el artículo 206 de la Ley 100 de 1993, el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 23 del Decreto 2461 de 2001, el trabajador incapacitado tiene derecho a que la E.P.S. a la cual se encuentre afiliado, le reconozca y pague las incapacidades laborales generadas por enfermedad de origen común hasta el día 180. **A partir del día 181, el pago de dicha prestación se encuentra a cargo de la respectiva A.F.P. a la cual se encuentra afiliado el trabajador, hasta que se produzca el dictamen de pérdida de la capacidad laboral y como resultado del mismo, se llegue a la conclusión de que aquel tiene derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez. En caso contrario, y en la medida en que se sigan generando incapacidades laborales, la A.F.P. debe continuar con el pago de las mismas, hasta que el médico tratante emita un concepto favorable de recuperación o se pueda efectuar una nueva calificación de invalidez**”.

(negrita, subraya, cursiva nuestra).

Para finalizar, y en el entendido del objeto de análisis, se hace mención a **la Sentencia T-137/12, Referencia: expedientes T- 3.192.708, T-3.247.258, y T- 3.242.540 (acumulado). Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional. Magistrado Ponente: HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO**

“(…)

En conclusión, en caso que, al trabajador, por causa de su estado de salud, le sean expedidas por su médico tratante, incapacidades y éstas no superen los 180 días, en primer lugar, le corresponde a la Empresa Promotora de Salud el pago de las mismas; sin embargo, **en el evento que se sobrepasen los 180 días, el responsable de su pago es el fondo de pensiones, ya sea hasta que se produzca un dictamen sobre su pérdida de capacidad laboral o se restablezca su salud**. Si el dictamen indica que el trabajador presenta una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, se causará en su favor la pensión de invalidez, siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos legales.

Igualmente, si el dictamen de pérdida de capacidad laboral arroja que el trabajador presenta una incapacidad inferior al 50%, y se siguen prescribiendo incapacidades laborales por el médico tratante, le corresponderá al fondo de pensiones seguir pagándolas, siempre que exista concepto favorable de rehabilitación o hasta que este se emita, o se pueda efectuar una nueva calificación de su invalidez.

En cualquiera de los dos eventos descritos en los párrafos precedentes, el empleador está obligado a mantener el vínculo jurídico laboral con el trabajador, y a continuar con el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social, conforme con lo que establezca el concepto sobre su rehabilitación”. (negrita, subraya, cursiva nuestra).

Así las cosas y de conformidad con lo antes expuesto, si bien es cierto la Administración Judicial no tiene obligación alguna en el Pago del Auxilio Económico por Enfermedad, también lo es que la Entidad viene asumiendo la cancelación de dicha prestación fundamentalmente en aras de garantizar a sus empleados y funcionarios el Mínimo Vital durante una situación grave de salud, en el entendido que las sumas abonadas por ese concepto al servidor judicial deberán ser reintegradas en su totalidad, bien sea por la EPS, la AFP, ARL o por el mismo beneficiario.
(Negritas y subrayados textuales).

Ahora bien, no es del resorte de la **DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN** el manejo de lo relacionado con derechos de carrera administrativa ni de emisión y aplicación de listas de elegibles o similares. Ello está a cargo del Consejo Superior de la Judicatura.

Asimismo, quiero dejar claro que como Dirección Seccional **NO somos el nominador** del empleado accionante; por lo cual NO le otorgamos situaciones administrativas que eventualmente devengan en nombramientos y/o subsistencias, y ulteriormente en estabilidad laboral reforzada.

Dicho de otra manera, NO tomamos decisiones que son facultades propias del nominador, tales como el nombramiento o declaratoria de insubsistencia de los empleados judiciales; toda vez que la Dirección Seccional funge únicamente como empleador, y como tal simplemente acatamos administrativamente las decisiones de los nominadores, y realizamos los pagos laborales a que den lugar.

Para ilustrar este punto, preciso hacer remisión a las facultades netamente administrativas que me han sido otorgadas, establecidas en la Ley 270 de 1996 "Estatutaria de Administración de Justicia", artículo 103:

ARTÍCULO 103. DIRECTOR SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL. Corresponde al Director Seccional de la Rama Judicial, ejercer en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial, las siguientes funciones:

- 1. Ejecutar el Plan Sectorial y las demás políticas definidas para la Rama Judicial.*
- 2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización.*
- 3. Suscribir en nombre de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban otorgarse o celebrarse, conforme a los actos de la delegación que expida el Director Ejecutivo de Administración Judicial.*
- 4. Nombrar y remover a los empleados del Consejo Seccional de la Judicatura, excepto los que sean de libre nombramiento y remoción de cada Magistrado y aquéllos cuyo*

nombramiento corresponda a una Sala.

5. Elaborar y presentar al Consejo Seccional los balances y estados financieros que correspondan.

6. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan.

7. Representar a la Nación-Rama Judicial en los procesos judiciales para lo cual podrá constituir apoderados especiales.

8. Conceder o negar las licencias solicitadas por el personal administrativo en el área de su competencia.

9. Solicitar a las autoridades competentes la adopción de las medidas necesarias para la protección y seguridad de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

10. Enviar al Consejo Superior de la Judicatura a más tardar en el mes de diciembre de cada año, los informes, cómputos y cálculos necesarios para la elaboración del proyecto de presupuesto de la Rama Judicial del año siguiente. Así mismo emitir los informes que en cualquier tiempo requiera dicha Sala; y,

11. Las demás funciones previstas en la ley, los reglamentos y los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura.

(Subrayado fuera de texto).

De lo anterior, se colige y evidencia que no es facultad del Director Ejecutivo Seccional definir la situación administrativa de HAVER LEÓN JARAMILLO OROZCO, empleado en PROVISIONALIDAD en el cargo de CITADOR del Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín; pues ello depende única y exclusivamente del nominador quien a su tiempo deberá acatar lo normado en materia de estabilidad laboral reforzada a la luz del tipo de nombramiento del empleado, esto es su provisionalidad, mientras no haya sido definido su diagnóstico médico.

También es evidente que, como ordenador del gasto, he venido cumpliendo con las obligaciones que en materia de seguridad social se ocasionen en todos y cada uno de los vínculos laborales con personal adscrito a esta Dirección Seccional, y entre ellos el señor HAVER LEÓN JARAMILLO OROZCO.

Por tanto, y no obstante haber suspendido los pagos de sus incapacidades, el empleado actualmente se encuentra vinculado con la Rama Judicial, y en consecuencia continuamos cumpliendo con la obligación del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud y pensión) tanto cuando estuvo incapacitado como desde que le fueron suspendidos dichos pagos al haber superado los 180 días de incapacidad; toda vez que ya la obligación es directamente del FONDO DE PENSIONES al que se encuentra afiliado. (Para probar este dicho se aportan las planillas de seguridad social.)

Así pues, tenemos plena claridad de que mientras subsista el vínculo laboral continuaremos cumpliendo con la obligación de afiliación y pago a la seguridad social;

misma que cesará a partir del momento en que el nominador nos notifique una situación administrativa de insubsistencia que dé origen a una desvinculación laboral.

Ahora bien, consultado el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo respecto al caso de la referencia, manifiestan que no tienen conocimiento de la situación expuesta, pues no han recibido solicitud de ninguna índole a su sistema de gestión.

En ese orden de circunstancias, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín NO es la llamada a satisfacer las pretensiones de la accionante, en tanto carece de competencia para tales efectos y, adicionalmente por no existir el deber de satisfacer el derecho hoy rogado ante su Despacho; así pues, no está llamada a responder por las conductas que presuntamente generan violación. Por lo tanto, se solicitará que no se vincule a la presente acción a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, por existir **FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.**

Frente a la **FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA**, el **HONORABLE CONSEJO DE ESTADO. CONSEJERA PONENTE: Dra. RUTH STELLA CORREA PALACIO**, en Sentencia del 22 de abril de 2009 - Radicado: 25000-23-26-000-1994-09898-01(16620) señaló:

“De manera muy sucinta ha señalado la Sala que la legitimación en la causa “por el lado activo, es la identidad del demandante con el titular del derecho subjetivo, es decir, con quien tiene vocación jurídica para reclamarlo y, por el lado pasivo, es la identidad del demandado con quien tiene el deber correlativo de satisfacer el derecho. La legitimación es, por lo tanto, un presupuesto material de la sentencia de mérito favorable al demandante. En consecuencia, si aparece acreditado en el proceso que la entidad que ha sido demandada, conforme a la ley sustancial, no es la llamada a responder por el daño cuya indemnización se reclama habrán de negarse las pretensiones de la demanda. (...)”

Sobre el particular, el Honorable **CONSEJO DE ESTADO**, en Sentencia del 3 de marzo de 2010, **CONSEJERA PONENTE: DRA. RUTH STELLA CORREA PALACIO**, puntualizó:

“...la legitimación material en la causa, en sus dos sentidos, es por activa cuando la identidad del demandante concuerda con la de aquella persona a quién la ley o un acto jurídico le otorga la titularidad de un derecho y la posibilidad de reclamarlo; por pasiva cuando la identidad del demandado es la misma con la de aquel a quién se le puede exigir el cumplimiento de la obligación o la satisfacción del derecho correlativos que tiene con el primero”.

En consecuencia, se reitera que éste accionado no tiene competencia Legal ni Constitucional, para acceder a lo pedido por la accionante; por tanto, no existe el deber de satisfacer el derecho.

3. FRENTE AL REQUERIMIENTO DEL DESPACHO

Con lo anteriormente expuesto, queda rendido el informe requerido por el Despacho mediante el Auto Admisorio del 21 de octubre de 2.021.

Luego, en respuesta a lo requerido, dejo constancia que, teniendo en cuenta las eventualidades y novedades informadas, desde el GRUPO DE ASUNTOS LABORALES se llevan a cabo las gestiones de manera oportuna y diligente continuando con las obligaciones que como empleador le asisten a esta Dirección Seccional.

Y, toda vez que este servidor no ha conculcado los derechos fundamentales que se reputan vulnerados, no es pertinente acudir al mecanismo de tutela para satisfacer el derecho rogado, esto es, brindarle protección al derecho fundamental de

estabilidad laboral reforzada, hasta tanto se obtenga un diagnóstico definitivo de mis patologías físicas y sensoriales, y se tramite el proceso de calificación de la pérdida definitiva de capacidad laboral;

Pero sí continuaré velando porque se le garantice y proteja el derecho fundamental a la seguridad social integral, tal como he venido haciendo desde siempre y de manera oportuna e ininterrumpida.

Dicho lo anterior, se solicitará declarar la improcedencia del mecanismo constitucional frente a mi representada.

4. PETICIÓN ESPECIAL

Con fundamento en las anteriores consideraciones, es pertinente **solicitar a Su Señoría** que en la presente acción constitucional se **DESVICULE a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN** y, de igual manera, que la acción propuesta por el señor HEVER LEÓN JARAMILLO OROZCO **sea declarada la IMPROCEDENCIA** de la acción así como la **falta de legitimidad en la causa por pasiva**; como quiera que no existe vulneración a los derechos fundamentales que depreca el accionante por parte de esta Dirección Seccional en calidad de empleador.

Lo anteriormente expuesto quedará probado con los siguientes documentos, que se anexan a este escrito:

- Resolución DESAJMER21-11420 30 de septiembre de 2021 "Por medio de la

cual se ordena la suspensión de pagos a servidores judiciales derivados de incapacidades medicas superiores a 180 días".

- Certificado de aportes de seguridad social desde enero de 2.021 al mes de agosto de 2.021.
- Certificación de tiempos de servicio.
- Copia de correo con pronunciamiento del Grupo de Bienestar, SG- SST.

Se anexa, además:

- Copia de la resolución 4104 de fecha 13 de mayo de 2019, mediante la cual se nombró al doctor Juan Carlos Peláez Serna como Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia, del acta de posesión y de documento de identidad.

Cordialmente,



JUAN CARLOS PELÁEZ SERNA

Director Ejecutivo Seccional
CBR/LMZO

Anexo: Lo enunciado.